Caso Específico

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS
EN COSTA RICA

*por FRANCISCO CONTRERAS MONDRAGÓN **

* Jefe, Departamento de Impuesto sobre la Renta, Dirección General de la Tributación Directa, Ministerio de Hacienda, Costa Rica.

I. DIFERENTES INSTANCIAS QUE SEÑALA LA LEY PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS

En lo que al Impuesto sobre la Renta se refiere, existen varias instancias en las cuales, siguiendo un orden de jerarquía, puede presentar sus alegatos el contribuyente inconforme con la fijación del impuesto hecha por la Oficina de la Tributación Directa. Tales instancias son:

- 1) Ante la Jefatura del Departamento del Impuesto sobre la Renta, donde se objetan las recalificaciones o tasaciones de impuesto practicadas por las Secciones de Auditoría del mismo Departamento. El reclamo debe ser presentado dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del cargo que hubiere recibido el interesado
- 2) Ante el Tribunal Fiscal Administrativo —compuesto por 5 miembros cuyo nombramiento se hace cada 4 años por el Poder Ejecutivo—, que conoce en alzada o apelación de lo resuelto por la Jefatura del Departamento de la Renta. La objeción debe ser presentada dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo de la resolución impugnada.

En este caso sólo son admisibles los reclamos con valor superior a C. 100,00 siempre y cuando el contribuyente hubiere cancelado el impuesto “que dijo tener que enterar”, habiéndose interpretado que éste se refiere al impuesto que declaró el interesado.

- 3) Ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que es una rama del Poder Judicial para atender las objeciones contra el Poder Central y las Instituciones Autónomas. El plazo para presentar el juicio respectivo es de dos meses a partir de la firmeza de la fijación del impuesto por el Tribunal Fiscal Administrativo y el contribuyente de previo debe cancelar el impuesto que discute.

Nuestro régimen jurídico impositivo presenta en la actualidad una innovación en cuanto a las controversias tributarias, toda vez que le permite a la administración impugnar los fallos que dicta el Tribunal Fiscal Administrativo cuando sean considerados lesivos a los intereses del fisco. La lesividad corresponde decretarla al Ministro de Hacienda ante gestión de la Oficina de Tributación que debe formular en un plazo de 4 años a partir de la resolución del Tribunal Fiscal Administrativo. Decretada la lesividad por el Ministro de Hacienda, el Gobierno goza de un plazo de 2 meses para iniciar el juicio ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, juicio que lleva a cabo la Procuraduría General de la República como organismo asesor del Gobierno en materia legal.

- 4) Ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de un plazo de 5 días después de comunicadas las partes en el juicio Contencioso-Administrativo. La apelación puede ser presentada por cualquiera de las partes —el interesado o el Gobierno— inconforme con lo resuelto en la instancia inmediata anterior.
- 5) Ante la Sala de Casación, que es la autoridad suprema del Poder Judicial, las partes inconformes pueden recurrir en última instancia siempre y cuando la cuantía del reclamo sea superior a ₡ 10.000,00.

II. EL PROBLEMA DE LOS RECLAMOS

El problema de los reclamos puede plantearse bajo tres puntos básicos, a saber:

- 1) Cómo reducir el número de apelaciones con relación al número de contribuyentes cuyo impuesto ha sido modificado o tasado de oficio; o sea que una mayor cantidad de contribuyentes acepte los cargos formulados por los auditores.

Durante el año 1966, un 28,30 % de los contribuyentes que recibieron cargos presentaron objeciones, y un 71,70 % los aceptaron.

- 2) Ya planteada la controversia ante la Jefatura del Departamento del Impuesto sobre la Renta, cómo hacer para aumentar la cantidad de contribuyentes conformes con sus resoluciones, a efecto de que recurra en una menor proporción a las demás instancias, de tal forma que el fisco pueda percibir en breve plazo el ingreso correspondiente, y además que el costo de la controversia sea disminuido.

En 1966 el 38,13 % de los contribuyentes que presentaron reclamos ante la Jefatura del Departamento no estuvo de acuerdo con sus resoluciones y el 61,87 % las aceptó.

- 3) Cómo aumentar la eficiencia en la atención de los reclamos, mediante cambios de organización, de procedimientos, sistemas y normas, para disminuir el promedio de "días-auditor" por reclamo resuelto. En 1966 se estableció un promedio de 3,27 días hábiles-auditor por reclamo resuelto.

Las causas del problema de los reclamos no pueden ubicarse en determinado campo específico, pues en ellas concurren una serie de circunstancias y hechos de muy diversa naturaleza, tanto de orden legal como administrativos, culturales, psicológicos, etc., en fin, que su estudio a fondo necesitaría un laborioso estudio y análisis, por lo que en este trabajo serán tratados los aspectos que se consideran de mayor importancia.

III. LOS HECHOS

Los hechos serán planteados para cada uno de los tres puntos fundamentales del problema de los reclamos, así:

- 1) Se considera que aún es alta la proporción de contribuyentes que

reclaman los trabajos realizados por los auditores cuyas causas más significativas son las siguientes:

- a) Gran cantidad de tasaciones de oficio en determinadas épocas, principalmente a los asalariados, que han sido enviadas, "ex-profeso", sin suficiente investigación en las deducciones concedidas, lo que dio origen a muchas apelaciones por parte de los afectados.

En efecto, la Oficina, cuando llevó a cabo un plan general de empadronamiento de empleados y ante las limitaciones de personal, optó por determinar la renta gravable deduciendo a los ingresos controlados únicamente la exención personal del contribuyente. Lo anterior, considerando que aun en el caso de que procediera a efectuar investigaciones más a fondo para concederle otras deducciones legales, no sería posible evitar el reclamo, por cuanto el interesado siempre pediría otras rebajas cuyo control no estaba al alcance de la Oficina y entonces se incurriría en doble costo: el de las investigaciones adicionales y el de la atención en todo caso del reclamo. Tomando en cuenta además que sería saludable que el contribuyente sufriera las consecuencias de su negligencia, obligándosele así a conseguir las pruebas en su descargo que la Ley le obliga a presentar con su reclamo en el caso de liquidaciones de oficio.

- b) No se ha establecido la norma de discutir los ajustes con los contribuyentes antes de proceder a la notificación oficial, lo que impide en muchos casos clarificar las situaciones de previo a la confección y envío del informe, y en consecuencia el interesado tiene que presentar su reclamo para exponer las razones que le asisten. No obstante, debe advertirse que tampoco existe prohibición para que el auditor lleve a cabo esa discusión, puesto que bien visto el punto, es parte de la misma labor de auditoría; lo que sucede, a veces, es que el propio auditor teme reacciones de parte del contribuyente al conocer el monto del impuesto fijado, que le interfiera su trabajo de auditoría mediante ciertas maniobras cuya solución o apreciación van a retardarle la emisión de su informe, perjudicando su estadística. En todo caso, al auditor no le satisface la discusión cuando el criterio que ha usado al recalificar lo considera de carácter restrictivo, ya sea este criterio de corte legal o práctico; es decir, cuando tiene conciencia de que le será sumamente difícil convencer al contribuyente de la bondad del ajuste.
- c) Existe una natural inclinación del auditor a actuar con cierta parcialidad a favor de la Oficina, estimulada por los aumentos que se reflejarán en su producto de impuesto obtenido, en la idea de que su trabajo será apreciado según el monto de diferencias de impuesto que acumule. Además, como la Ley del Impuesto sobre la Renta es de grandes principios generales, existen muchas situaciones que pueden ser resueltas en uno u otro sentido, lo que obliga a seguir una política de carácter conservador.

Lo anterior, unido a la circunstancia de que muchos contribuyentes no prestan la suficiente colaboración en las investigaciones que se les practican, sino que por el contrario, tienden a obstaculizarla en muy diversas formas sin que existan sanciones específicas para ello, viene a perjudicar al mismo contribuyente, porque esto hace que recaiga sobre él el peso de la prueba. Lógico es que todo ello concurre también a crear cierta renuencia en la discusión de los ajustes y a fomentar la presentación de reclamos.

- d) La ley no tiene suficientes obstáculos para frenar aquellos reclamos que no tienen más finalidad que la de retardar el pago del impuesto recalificado. La Ley N° 1789 de 18 de septiembre de 1954 le permitía al contribuyente llevar su apelación hasta el Tribunal Fiscal Administrativo sin exigirle ningún pago y sin que sufriera ningún recargo sobre la suma en discusión, hasta tres meses después de que se hubiera declarado en firme, siempre y cuando la diferencia no obedeciera a un acto doloso. De acuerdo con la reforma contenida en la Ley N° 3063 del 14 de noviembre de 1962, las diferencias de impuesto sobre lo declarado deben pagar un 1 % mensual de recargo a partir de la fecha en que el impuesto original debió haber sido pagado, hasta un máximo del 24 %. También impuso la condición de que para poder presentar apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, el contribuyente debe haber cancelado el impuesto "que dijo tener que enterar", lo que se ha interpretado como el correspondiente a la declaración presentada.

El recargo citado se considera insuficiente para evitar los reclamos que sólo tienden a retardar el pago de las diferencias determinadas sobre el impuesto declarado, toda vez que el porcentaje citado del 1 % es más bajo que el normal del mercado en operaciones particulares, con las siguientes ventajas adicionales para el contribuyente: que teniendo el recargo un límite máximo aplicable del 24 %, cualquier atraso que sobrepase los 24 meses viene a redundar de hecho en una disminución del porcentaje mensual, con lo que el contribuyente obtiene mayores beneficios con el transcurso del tiempo en mora.

Todo esto fomenta los reclamos, aunque los mismos interesados los consideren improcedentes, porque con sus apelaciones evitan la acción judicial cobratoria obteniendo a su vez los beneficios expuestos.

- e) Otra de las dificultades en este asunto de la Ley es el silencio que ésta guarda, especialmente en cuanto a procedimientos se refiere, los cuales, por lo menos, deben estar debidamente reglamentados. Es fácil comprender entonces el porqué de muchos reclamos, en los cuales se aduce que no puede distinguirse donde la Ley no distingue. Debido también a los referidos vacíos de la ley que rige la materia, nuestros funcionarios fiscales no cuentan con los instrumentos legales necesarios para coadyuvar a la preparación de informes más objetivos y mejor documen-

tados. Como ejemplo, puede citarse el caso de las cuentas bancarias de los contribuyentes. En una legislación anterior, la Oficina estaba facultada para pedir, en los casos que se consideraban necesarios, informes a todos los Bancos del país relativos al movimiento de sus cuentas corrientes. Se demostró que en muchos casos tales informaciones fueron de gran utilidad para llegar a determinar cuantiosas evasiones en el pago de los impuestos correspondientes. Posteriormente, con motivo de la nacionalización bancaria, se adujo que tal facultad estaba auspiciando una disminución en los depósitos bancarios, con peligro para la estabilidad económica de los mismos bancos del Estado, logrando entonces los personeros de éstos la derogativa de dicha disposición por medio de un decreto legislativo. En realidad, nunca nos convenció tal argumento y, honestamente hablando, hemos llegado a la conclusión de que la medida objeto de comentario era innecesaria y contraproducente; véase si no que los países más avanzados en materia fiscal gozan de amplias facultades en ese aspecto, de inapreciable importancia para una cabal aplicación de las leyes impositivas.

Como fácilmente se deduce, debido a las limitaciones que en parte aquí se comentan, queda por tanto fomentada, hasta cierto punto, la presentación de reclamo que se valen de las mismas deficiencias enunciadas.

- 2) Se considera que aún es alta la proporción de contribuyentes que reclaman las resoluciones dictadas por la Jefatura del Departamento de la Renta, cuyas causas significativas son las siguientes:
 - a) Los miembros que forman el Tribunal Fiscal Administrativo son nombrados por el Poder Ejecutivo cada cuatro años. La experiencia nos ha demostrado que esa alternabilidad no permite una verdadera capacitación y especialización de los integrantes del mencionado Tribunal, razón por la cual ha venido a resultar inaplicable la jurisprudencia a que se refiere el artículo 34 de la respectiva Ley, pues no resulta conveniente establecer normas para determinados casos con base en los fallos de dicho Tribunal cuando las resoluciones correspondientes no convienen a plenitud. Pero en este sentido es oportuno señalar que las mismas ambigüedades de la Ley y sus vacíos, auspician en cierta forma el problema citado.
 - b) El contribuyente se ha formado la idea de que el Departamento hace todo lo posible por mantener el ajuste objetado y que para ello usa tesis restrictivas en cuanto a la interpretación de la Ley y de los hechos, contrariamente al Tribunal Fiscal Administrativo, cuyo nombramiento es por cuatro años, que es menos estricto al efecto.

La división de esos campos en la forma expuesta surge, básicamente, por la falta de claridad de la Ley como ya se dijo y falta de reglamentación sobre las situaciones ambiguas que contiene, las cuales dan base para resolver en una u otra forma, en ciertos casos.

Esa división se acentúa más por el hecho de que, actualmente al propio auditor que hizo la recalificación o tasación le corresponde atender el respectivo reclamo, y aun cuando es el Jefe del Departamento de la Renta quien por ley debe aprobar la resolución correspondiente, resulta lógico suponer la influencia que ejerce el auditor sobre aquélla y las consecuencias que de ello se derivan.

- c) Buena parte de los contribuyentes, acatando las instrucciones de sus asesores, no presentan en la primera instancia lo que ellos llaman sus "pruebas" para que el Departamento de la Renta no pueda llevar a cabo investigaciones exhaustivas ante el temor de que demuestre su falsedad; y así prefieren presentarlas ante el Tribunal Fiscal Administrativo, que no cuenta con suficientes medios para realizar tales investigaciones, por lo que tienen más posibilidades de que tales "pruebas" sean aceptadas.
 - d) La presentación ante el Tribunal Fiscal Administrativo de reclamos que sólo tienden a retardar el pago de las diferencias de impuesto, son inevitables actualmente por lo expuesto en relación al bajo porcentaje de recargo que surge en definitiva, según ya fue comentado anteriormente.
 - e) Existe además la presión de los asesores sobre el contribuyente para llevar los casos hasta el Tribunal Fiscal Administrativo, en el entendido de que en una u otra forma esto les proporcionará mayores honorarios por sus intervenciones.
- 3) Se considera alto el promedio de días hábiles-auditor por reclamo resuelto, debido principalmente a que, actualmente es el mismo auditor que realizó el cargo al contribuyente quien debe atender el reclamo respectivo, y no todos los auditores tienen la habilidad requerida para la emisión de los proyectos de resolución.

Por otro lado, el auditor se muestra más interesado en los aumentos de impuesto a través de sus recalificaciones, de tal forma que el reclamo le resulta ser un trabajo molesto por varias razones, sobre todo porque interfiere con su labor propia de auditoría y porque a veces la apelación contiene calificativos duros para el trabajo impugnado.

Lo anterior, unido al hecho de que la resolución se considera una pieza muy formal en todos sus aspectos, que obliga a una cierta especialización, viene a combinarse para hacer más lento el trámite de la atención del reclamo y a recargar mucho el trabajo de los jefes respectivos en su labor de revisión y corrección de proyectos.

Anteriormente, cuando existía una Sección especializada para la atención de los reclamos, esos problemas no se presentaban y el promedio de días hábiles-auditor por reclamo resuelto era más bajo que en el sistema actual, según puede verse en los siguientes datos:

- Promedio de días hábiles-auditor por reclamo resuelto en *Sección de Reclamos*

2,39

- Promedio de días hábiles-auditor por reclamo resuelto en sistema actual - en que cada *Auditor atiende el Reclamo contra su propio Trabajo*.

3,27

Sin embargo, debe abonársele al sistema actual la solución del problema de la acumulación de reclamos por resolver que a veces se presenta en una sección de reclamos especializada por falta de suficiente personal. Al finalizar cada uno de los años 1961, 1962 y 1963, en los cuales estuvo operando la Sección de Reclamos, los saldos de apelaciones fueron de 254, 269 y 1060, respectivamente, en tanto que bajo el sistema actual los saldos han sido de 94, 109 y 100 para cada uno de los años 1964, 1965 y 1966 por su orden.

Además, ha logrado reducir el porcentaje de contribuyentes que reclaman, de un 34,30 % correspondiente a la época de la Sección de Reclamos a un 28,30 % actualmente, y esto es una consecuencia lógica del hecho de que sea el propio auditor que realizó el trabajo quien deba atender el reclamo respectivo, lo que le hace ser más cuidadoso en los cargos que practica.

IV. DISCUSIÓN DEL PROBLEMA

1) En cuanto al punto de alta relación reclamos-contribuyentes recalificados:

Como de la misma exposición del problema se deduce, resulta indispensable para su solución una serie de reformas legales en las cuales la Oficina de Tributación Directa sólo puede ofrecer su colaboración en calidad propiciadora y asesora, toda vez que en definitiva corresponde a la Asamblea Legislativa dictar la legislación correspondiente. Actualmente funcionarios del CIAP, a solicitud del Gobierno de la República, están trabajando en un proyecto de reforma integral de la legislación tributaria vigente.

No obstante, existen algunos aspectos del problema que, con algunas medidas de tipo administrativo, podrían ser resueltos o amiorados sus efectos, tales como:

a) *Caso de tasaciones sin estudio suficiente:*

Cuando la Oficina se avocó a liquidar de oficio el impuesto de gran cantidad de contribuyentes, se encontró que la mayoría de éstos adeudaban más de cinco declaraciones.

El régimen de prescripción contenido en la ley del impuesto sobre la renta le concede a la Oficina 5 años para liquidar de oficio el impuesto y para recalificar las declaraciones cuando hubieren sido presentadas con "evidente mala fe", y limita a 3 años el plazo para las demás recalificaciones. El término comienza a contarse desde la fecha en que el impuesto del período respectivo "debió haberse pagado".

Siendo así las cosas, la Oficina optó por no solicitarles las declaraciones a

los contribuyentes morosos y así poder liquidarles de oficio el impuesto, considerando que tal proceder tendría las siguientes ventajas:

- i) Ante una tasación de oficio el contribuyente se encuentra obligado a presentar pruebas sobre lo que alega y solicita, y en consecuencia la Oficina tendría la oportunidad de fijar el impuesto, conforme a datos ciertos, para los 5 años que concede la Ley en caso de liquidaciones de oficio.
- ii) De haber solicitado las declaraciones, sólo hubiera podido ajustar o investigar 3 años, porque para recalificar los 5 tendría que probar la evidente mala fe en las declaraciones respectivas, y esto es sumamente difícil.
- iii) El costo del proceso hubiera sido más alto, porque comprendería la solicitud de las declaraciones, la recepción y liquidación, revisión y recalificación; y luego el trámite de la atención de los reclamos. Además se estima que por lo menos la mitad de los contribuyentes no habrían atendido la solicitud.

Por lo expuesto, y ante la realidad de que la mayoría de los contribuyentes en mora adeudaban más de cinco declaraciones, se considera justificado el procedimiento seguido, no obstante que esto originó una alta proporción de reclamos, ya que el 63,68 % de las tasaciones emitidas fueron reclamadas.

Vista la experiencia anterior y para obviar el problema, se considera indispensable una acción sistemática en la solicitud anual de declaraciones, tanto a los contribuyentes empadronados y no empadronados, a efecto de que estas declaraciones queden sujetas a la acción fiscal bajo los planes normales de fiscalización.

Esa solicitud debe estar a cargo básicamente de la Oficina Mecanizada para los empadronados y sería conveniente iniciarla una vez concluido el plazo legal de presentación, lo que ya está propuesto para su ejecución. Luego se hace indispensable nombrar un grupo de empleados especialmente dedicados a la solicitud de declaraciones de no empadronados, conforme a las fuentes de información con que cuenta la Dependencia. Las personas que no atiendan esas gestiones serían reportadas a las Secciones de Auditoría, para que procedan éstas a tomar las medidas pertinentes.

El auditor que atienda el caso asignado de un contribuyente omiso en la presentación de sus declaraciones, sobre todo si el origen de las rentas es de actividades luerativas, antes de liquidar de oficio el impuesto primero lo instaría a que llene los formularios respectivos bajo su guía y supervisión, con lo que eliminaría una buena proporción de reclamos y tendría la oportunidad de instruir directamente al contribuyente de sus obligaciones tributarias y forma de cumplirlas.

Es entendido que el producto del impuesto así establecido se le computaría al auditor correspondiente como obtenido de su propia labor de auditoría, a efecto de que sienta interés en ese tipo de trabajo.

- b) Se nota la conveniencia de establecer como norma oficial la discusión de los ajustes con el contribuyente, como una acción ten-

diente a disminuir, hasta donde sea posible, la presentación de reclamos. Lo que se pretende con esto es aclarar cualquier duda sobre los cargos formulados antes de la redacción del informe y ejercer una labor de convencimiento hacia el interesado —que en el fondo resultaría ser de tipo educativo—, sobre las bases legales y contables que ha tenido la Oficina para proceder a la formulación de los cargos pertinentes.

2) En cuanto al punto de que una mayor proporción de contribuyentes quede satisfecha con las resoluciones de la Jefatura del Departamento de la Renta:

a) La Ley número 3063 de fecha 14 de noviembre de 1962 dispone en su artículo 34 que: “La Tributación Directa deberá ajustarse en sus resoluciones a la última dictada por este Tribunal en casos similares, mientras no hayan sido variadas.”

No obstante que esta norma fue emitida con la evidente intención de que la mayoría de las controversias quedaran definitivamente resueltas a nivel de la Jefatura del Departamento, con base en los fallos del Tribunal Fiscal Administrativo sobre casos similares, tal norma, como antes se dijo, ha resultado inoperante.

Si se le buscara una aplicación satisfactoria a dicha disposición de que la mayoría de las controversias quedaran definitivamente resueltas a nivel de la Jefatura del Departamento de la Renta, que reclaman las resoluciones de la Jefatura del Departamento de la Renta.

Hasta el momento no se ha logrado ese objetivo. Para ello, las resoluciones del Tribunal deben ser más convincentes, que sienten verdaderas tesis debidamente argumentadas, teniendo en mente que van a servir de “jurisprudencia”.

Un Tribunal puede ser bueno en ese sentido, pero no soluciona el problema por cuanto a los cuatro años generalmente es cambiado por otro que puede no seguir actitud similar.

Esta situación se ha agravado por cuanto los dos tribunales que antes existían, uno para resolver apelaciones sobre avalúos de bienes inmobiliarios y otro para asuntos de renta, fueron reunidos en uno solo que atiende ambas materias, bastante disímiles entre sí; de tal manera que funcionarios especializados en valuaciones deben intervenir y votar asuntos relacionados con el tributo de renta y viceversa, lo que juega un papel importante en contra de resoluciones más acertadas, que sirvan de norma a las actuaciones de la Oficina conforme al artículo 34 ya mencionado.

En algunas oportunidades se ha discutido si, de acuerdo con la experiencia, le conviene a la Administración la existencia de un Tribunal Fiscal Administrativo cuyos funcionarios, por ley, deben abandonar todas sus actividades profesionales para poderlo integrar sólo por cuatro años, o si sería preferible una sala especializada en el poder judicial para tales efectos con carácter permanente.

Aparte de los cambios estructurales que pudieran originarse con respecto a dicho Tribunal, la Oficina, después de promul-

gada la Ley de lo contencioso-administrativo, de 1966, sigue la política de acoger todos aquellos fallos que considera convincentes, haciendo la divulgación respectiva al personal para que actúe de conformidad; y apela de todos aquellos fallos que en una u otra forma considera equivocados o lesivos, para que sea el Poder Judicial el que en tales casos siente jurisprudencia. Las apelaciones llevadas a cabo por la Oficina originarán una mejora evidente en los futuros fallos del Tribunal.

En esta forma existirá un tratamiento uniforme hacia todos los contribuyentes y no se presentará la situación anterior de que había mucha divergencia en los puntos de vista del Tribunal con respecto a los del Departamento de la Renta, viéndose más favorecidas todas aquellas personas que llevaban sus casos hasta el citado Tribunal.

- b) El hecho de que sea el mismo auditor que practicó la recalificación o tasación quien tenga que atender el reclamo correspondiente, conforme con la organización actual, no permite lograr un mayor grado de equidad en la resolución de los asuntos sometidos a controversia ante el Departamento de la Renta. En efecto, es fácil comprender que el auditor sienta una inclinación natural, consciente o inconsciente, por mantener hasta donde le sea posible los ajustes que él mismo ha practicado, y por lo tanto tienda a resolver la controversia desde un punto de vista más subjetivo que objetivo. Además de lo anterior, cuando el contribuyente viene a saber que es el mismo auditor que realizó los ajustes quien atiende también su inconformidad, pierde confianza en la justicia de lo que se le resuelva.

Todo esto, en una u otra forma, fomenta las apelaciones para ante el Tribunal Fiscal Administrativo.

Un cambio en la organización actual, conforme se dirá en el punto siguiente, resolvería este tipo de problema.

- 3) En cuanto al punto de cómo bajar el promedio de días hábiles-auditor por reclamo resuelto, cabe decir:

Es indudable que con la creación de una Sección dedicada exclusivamente a resolver las alegaciones que los contribuyentes presentan, como resultado de la función fiscalizadora ejercida por la Oficina, se establecería una labor especializada en ese aspecto, lo cual lógicamente ocasionaría un mejor rendimiento de su personal, afirmación ésta que tiene su fundamento al observar comparativamente los promedios de días hábiles-auditor que se reflejaron con el procedimiento anterior (Sección de Reclamos, 2,35) y procedimiento actual (auditor atendiendo el reclamo de su propio trabajo, 3,27).

Sin embargo, por otra parte, puede existir el temor de que en determinado momento se llegue a acumular una cantidad grande de reclamos por resolver, ya sea por falta de personal en dicha Sección de Reclamos o por una mayor proporción de contribuyentes que objeten las modificaciones o tasaciones practicadas, pues como ya se dijo anteriormente, el sistema actual en que cada

auditor atiende los reclamos a sus propias intervenciones no ha permitido su acumulación y además ha logrado bajar la proporción de contribuyentes que reclaman comparada con lo que se determinó en tiempo de una Sección especializada de tales reclamos.

Desde ese punto de vista, y tratando de establecer una especie de síntesis, a manera de un proceso dialéctico entre la tesis y la antítesis, se plantea seguidamente una posible solución al problema del pro y el contra, tomando en cuenta las ventajas que uno y otro procedimiento nos ofrecen y han experimentado.

He aquí lo que se propone: Establecer una función independiente en el departamento de la Renta en la cual los especialistas técnicos revisarían el aspecto de precisión técnica y compatibilidad objetiva de todos los informes de los auditores antes de que se envíen a los contribuyentes. Estos especialistas también podrían ponerse en contacto con los contribuyentes, explicar puntos controversiales técnicos y tratar de alcanzar un entendimiento mutuo en los puntos basados en hechos, en un esfuerzo tanto para cerciorarse de que los informes que se remiten a los contribuyentes son técnicamente precisos como para obtener consentimiento a algunas modificaciones.

Se cree que mediante este proceso se podría eliminar, en su fuente de origen, una gran cantidad de apelaciones. Sin embargo, sería irrazonable suponer que todas las apelaciones podrían eliminarse de este modo. En estas instancias el contribuyente podría aún buscar una audiencia independiente del personal ubicado dentro de esta función que tendría a su cargo la resolución de apelaciones.

Este procedimiento, al eliminar la situación en que el auditor es juez y parte de su propia modificación, deberá restablecer la confianza del contribuyente tanto en la precisión técnica de los informes que éste revisa provenientes del Departamento como, también, en la imparcialidad que podría recibir cualquier apelación presentada por él. El resultado deberá ser un más alto nivel de conformidad a las modificaciones de los auditores en este nivel administrativo.